

ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

Universidad Central de Venezuela

reveciso@faces.ucv.ve

ISSN: 1315-6411

VENEZUELA

2004

Javier Sanjinés C.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO POLÍTICO EN BOLIVIA

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, enero-abril, año/vol. 10, número 001

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

pp. 203-218

MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO POLÍTICO EN BOLIVIA

Javier Sanjinés C.

Durante la transmisión del mando presidencial, llevada a cabo el 6 de agosto de 2002, el hemicycleo congresal nos mostró a los bolivianos una imagen del país a la que no estábamos acostumbrados. Reunido ese día para recibirles el juramento a los nuevos mandatarios electos en los comicios electorales que se realizaron el 30 de junio de 2002, el Congreso Nacional no tenía ya el componente étnico homogéneo de mestizo-criollos que constituían tradicionalmente la legislatura, y representaban la unidad nacional. Ahora, las imágenes que el Congreso emitía eran ilustrativas de que un cambio profundo había tenido lugar en Bolivia, país que, con ocho millones de habitantes y conformado por varias etnias, reúne el aymara, el quechua y el guaraní, los tres idiomas originarios más hablados en todo el continente. En un lado del hemicycleo, congresistas de ambos sexos, vestidos de corbata y traje sastre, apoyaban fervientemente el discurso presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada, el neoliberal que volvía al poder después de cinco años, en un momento de aguda crisis de las reformas que él mismo había puesto en marcha entre 1993 y 1997. En el otro lado del hemicycleo, el sector igualmente importante de congresistas vestidos de chamarras, ponchos y sombreros, escuchaba en silencio y con gesto risueño que denotaba incredulidad, el discurso de unidad nacional que proponía el flamante Presidente, y que sonaba algo artificioso porque respondía a los intereses de una parte del país: la Bolivia moderna, ajena a las demandas indígenas y campesinas.

En los hechos, la frágil gobernabilidad parlamentaria, lograda a duras penas por el modernizador Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), mostraba ese día la quiebra profunda que se ha producido en esta Bolivia contemporánea. Lejos del acuerdo social que el discurso presidencial prometía, la reunión del Congreso era indicativa de la barrera cultural que hoy día divide a los bolivianos entre *q'aras* –nombre genérico quechua y aymara para los blancos y los mestizos, y que literalmente significa “desnudo, pelado”– e indígenas; de la escisión económica entre ricos y pobres; de la disparidad geográfica entre *cambas* –los habitantes del oriente boliviano– y *collas* –los habitantes andinos, descendientes del Kollasuyo– y, por último, de la aguda división política entre gobernantes y opositores.

Al observar las imágenes que la televisión difundía en todo el territorio patrio, también recordaba, ese 6 de agosto de 2002, cuán diferente era esta sesión congresal de la que tuvo lugar hace diez años atrás, cuando Sánchez de Lozada llegó por primera vez a la primera magistratura de la nación para continuar y profundizar el sistema neoliberal que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido político en el poder, había impuesto en 1985, dándole un giro de trescientos sesenta grados al capitalismo de Estado que el propio MNR inauguró con la revolución nacional de 1952.

Las elecciones del 30 de junio, que precedieron a esta ceremonia de transmisión del mando presidencial, pusieron en evidencia las dos tendencias que marcan hoy en día la vida política boliviana: por un lado, la reconstrucción de la capacidad popular para intervenir en la vida pública, capacidad ésta que había quedado totalmente neutralizada por las reformas neoliberales que el Estado puso en marcha en 1985; por otro lado, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, incluyendo el MNR. Por ello, dos cosas aparecen nítidamente en el escenario político y social de la Bolivia del presente: en primer lugar, el crecimiento de la capacidad popular para neutralizar las reformas neoliberales del pasado inmediato, y, en segundo lugar, la erosión paulatina de la política tradicional. Ambas situaciones se hicieron visibles en las elecciones pasadas, elecciones que dieron como resultado el crecimiento inusitado de una nueva izquierda organizada alrededor de vigorosos movimientos sociales, a cuyo estudio nos abocaremos en este trabajo, y la condensación de una decreciente votación alrededor de partidos tradicionales que impulsaron el proyecto neoliberal (Gutiérrez y García Linera, 2002).

Estas elecciones fueron la quinta vez que la población boliviana pudo manifestar su voluntad en las urnas, desde la “apertura democrática” de 1982, año que marcó el final del militarismo autoritario que gobernó el país casi ininterrumpidamente desde 1964. Sin embargo, y en claro contraste con las elecciones previas, la de junio no fue la simple rotación de partidos políticos tradicionales, acostumbrados a que sus elites urbanas criollo-mestizas ocupen los curules parlamentarios y las otras instituciones del poder, sino el más claro reto al neoliberalismo, proveniente de las fuerzas populares encabezadas por el caudillo cocalero Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS), y por el partido indianista (MIP) de Felipe Quispe, apodado “el Mallku”. Hoy en día, estas fuerzas sociales, con su innegable fuerza parlamentaria, ponen en serio aprieto el ejercicio tradicional de la política y del poder.

Estamos hablando de nuevos movimientos sociales, indígenas y campesinos, que han sido exitosos en el bloqueo de ciudades y de carreteras, entre 2000 y 2003, y cuyo más reciente conflicto con el Estado fueron los enfrentamientos armados del mes de septiembre, en la altiplanicie aymara de Achacachi y de Warisata, en repudio de la venta de gas boliviano por puertos chile-

nos¹. Estos movimientos sociales inician lo que podría ser el final de la época estatal neoliberal; también dan lugar al nacimiento de nuevas fuerzas de izquierdas en el campo político (García Linera, 2003). Sin lugar a dudas, lo que viene sucediendo en Bolivia, ante el pasmo de los sectores mestizo-criollo urbanos, es el fin del ciclo político de una democracia procedimental vacía de contenido, ligada a proyectos neoliberales que se resquebrajan y se hunden en todo el continente.

En gran medida, el pasmo criollo-mestizo tuvo que ver con el hecho de que la conciencia ciudadana equiparó, en las últimas dos décadas, la ascensión del neoliberalismo con el acceso a la modernidad, entendida ésta como la necesidad de introducir una economía de mercado fundada en la renovación tecnológica y en la racionalidad. Sin embargo, el “sí, se puede”, eslogan modernizador con el cual el MNR de Sánchez de Lozada llevó a cabo su campaña proselitista, es negado día a día por una realidad económica y social totalmente adversa. Hoy, Bolivia es menos moderna que hace veinte años atrás. Con el cierre de las empresas estatales, el número de trabajadores asalariados se ha reducido considerablemente y el número de unidades domésticas que trabajan por cuenta propia, bajo la forma del autoconsumo, se ha multiplicado por diez. El sector informal ciudadano también ha crecido y el número de personas que mantienen relaciones contractuales y mercantiles se ha reducido a 32% del total de la población trabajadora urbana (García Linera, 2002, 149).

En materia de tecnología, el crecimiento descontrolado de los sectores informales negó la posibilidad de que se generalice en la ciudadanía el uso de la tecnología. Si se tiene en cuenta que poco menos de 50% de la población vive todavía en áreas rurales, la población campesino-indígena, de más de dos millones de habitantes, no tiene otro instrumento de trabajo que no sea el arado egipcio arcaico. El empleo de tecnología de punta queda restringido a los sectores relacionados con la telecomunicación y la banca, y a sólo 10% de la extracción minera y del trabajo industrial (García Linera, 2002, 150).

Tampoco fue particularmente aleccionador el empleo de la ética burguesa del trabajo que guía todo proceso modernizador. Los hábitos tradicionales y las pautas de conducta no han cambiado mayormente. En efecto, el período neoliberal estuvo plagado de estafas bancarias, ligadas a créditos vinculados con el Estado, y el empleo patrimonial del poder se mantuvo inalterado. Todo ello muestra que las prácticas señoriales, la prebenda y el uso indebido del poder no se modificaron en todos estos años de neoliberalismo a ultranza, y que la proclamada modernidad quedó reducida a eslóganes de campaña proselitista, como la irónica “Bolivia, país de vencedores”.

¹ El 12 de octubre de 2003, cuando reviso por última vez este trabajo, recibo las noticias del sangriento enfrentamiento entre el ejército y los residentes de la ciudad del Alto, urbe de aproximadamente medio millón de habitantes, que limita con la ciudad de La Paz.

En resumen, el neoliberalismo, impuesto estas dos décadas por un sector criollo-mestizo que es burgués sólo en apariencia, se tradujo fatalmente en un “keynesianismo al revés” (García Linera, 2002, 152) en el cual el Estado redujo sus funciones productivas para agigantar su intervencionismo regulatorio en beneficio exclusivo de la inversión privada extranjera.

En las páginas que siguen revisaremos por qué el fracaso modernizador del proyecto económico neoliberal estuvo estrechamente ligado al auge de los nuevos movimientos populares. Acto seguido, relacionaremos la recomposición de la capacidad colectiva de lucha con el movimiento cocalero de Evo Morales. Luego, volcaremos la atención hacia los otros movimientos populares que tuvieron éxito estos últimos años, particularmente a la llamada Coordinadora de la Defensa del Agua y al movimiento aymara de Felipe Quispe. Por último, concluiremos con algunas observaciones en torno de las actuales limitaciones de estos nuevos movimientos sociales.

1. Reformas neoliberales y nuevos movimientos sociales

Durante los últimos quince años, politólogos y científicos sociales pusieron toda su atención en las reformas neoliberales introducidas en el país con el retorno del MNR al poder, en 1985, y, sobre todo, con la promulgación de tres leyes fundamentales –la Ley de Capitalización, la Ley de la Participación Popular, y la Ley de la Reforma Educativa– que dieron notoriedad a la primera gestión administrativa de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 1993 y 1997. Pero a pesar de los análisis en torno del Estado plurinacional y a la nación multicultural (Mayorga, 2002), o a los esfuerzos continuos por afirmar teóricamente la modernidad y la gobernabilidad (Calderón y Laserna, 1994), o a la necesidad de afianzar la cultura política de la democracia bajo regímenes neoliberales (Lazarte, 2000), o a la búsqueda de una articulación entre el modelo neoliberal de democracia política y la diversidad social de raigambre étnico-cultural (Rojas, 1999), lo cierto es que la práctica política del neoliberalismo impulsó, en 1985, un plan de estabilización económica que provocó el serio distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil. Los despidos masivos, la disminución drástica del valor de la fuerza de trabajo, la soberbia de la “clase política”, el menosprecio que la política tradicional tuvo por las aspiraciones y necesidades de la población, son factores que hoy pesan fuertemente en la conciencia ciudadana y tienen que ver con el auge de los nuevos movimientos sociales.

Entre 1985 y 1997, año en que concluyó el primer mandato de Sánchez de Lozada, las políticas neoliberales quebraron las estructuras organizativas de movilización y de acción popular. Estas políticas provocaron el dismantelamiento de las industrias locales anteriormente nacionalizadas. Llamando “capitalización” a lo que en realidad es la privatización de la riqueza, el Estado neoliberal se ve hoy en figurillas para revertir el empobrecimiento generalizado del pueblo y su postergada posibilidad de ascenso y de movilidad social.

El esfuerzo político más sistemático del Estado neoliberal por reorganizar la participación pública fue la promulgación, en 1995, de la Ley de Participación Popular. Pensada para disolver las prácticas políticas de la autogestión y de la autodeterminación comunitaria, esta ley modernizadora consiste en la remunicipalización del país. Al pretender quebrar las asociaciones y los vínculos comunitarios, e imponer nuevas formas de control y de gestión del territorio –formas que son controladas por tecnócratas y por administradores ligados al poder y a los partidos políticos–, la Ley de Participación Popular, creada con intención modernizadora, no tuvo en cuenta que más de la mitad del territorio patrio responde a una lógica indígena de “servicio a la comunidad” que se distingue y se contrapone a la del “poder sobre la comunidad”, propia de los sistemas occidentales (Albó, 2002, 19). Es esta “democracia étnica” (Rojas, 1994) o “democracia aymara” (Albó, 1972), fundada en el sentido de reciprocidad y de trabajo colectivo, que la Ley de Participación Popular tornó invisible, lo que muestra la contradicción entre la normatividad estatal y las prácticas cotidianas provenientes de las comunidades rurales de matriz indígena.

Así, la Ley de Participación Popular puede ser leída como la medida política más elaborada del neoliberalismo por invisibilizar, controlar y disolver las prácticas políticas comunales (Gutiérrez y García Linera, 2002, 17). En tal sentido, la así llamada “participación popular” fomentó la división de las comunidades, reatándolas a la sumisión clientelar de los partidos políticos y de sus elites ciudadinas occidentalizadas.

Al enfrentarse a estas reformas neoliberales, el movimiento popular tuvo una dura tarea reorganizándose, después de años de desorientación y de debacle. De este modo, podemos distinguir dos momentos del movimiento popular contemporáneo: por un lado, el momento de la derrota de las fuerzas populares ligadas a la clase obrera, período éste que se extiende de 1985 a 1999; por el otro, el momento de la recomposición de su capacidad colectiva de lucha, durante los últimos cuatro años. Este momento se hizo visible para todos en las elecciones de 2002 y en la sesión del Congreso Nacional que relato al comienzo de este trabajo.

En Bolivia, la izquierda asistió a su derrota mucho antes de que cayese el muro de Berlín y de que el izquierdismo mundial se desorganizase. Entre 1984 y 1985, la desastrosa gestión gubernamental de la Unidad Democrática y Popular (UDP), previa al retorno del MNR y a la implantación de su política económica neoliberal, mostró no sólo la impotencia de los partidos de izquierda que conformaban este bloque político, sino también la de los sectores de la extrema izquierda, incluidos los partidos comunistas, que caían derrotados en sus planteamientos políticos y económicos. Atrincherada todavía en un capitalismo de Estado, en momentos en que éste era desmantelado por las elites empresariales, la izquierda no había dejado de ser colonial en su relacionamiento con el indio, y nacional-estatista en materia económica. Puede entonces decirse que la izquierda, a la que se sujetaba la clase obrera, era nada más que una prolongación del nacionalismo revolucionario. Por ello, el colapso

de este modelo de economía y de Estado, entre 1984 y 1985, marcó también el fin de la izquierda, y cerró un ciclo político que comenzó después de la derrota de la Guerra del Chaco (1932-1935), con el auge del MNR, partido que al aparecer en el escenario político enarbó el “nacionalismo revolucionario” para llegar al poder en 1952. De este modo, el fin del nacionalismo revolucionario –no así del MNR, convertido en 1985 al neoliberalismo– fue poco heroico porque los mineros, aquellos que habían construido la nación revolucionaria a punta de dinamita y de disciplina sindical, no tomaron por asalto la histórica Plaza Murillo, donde se ubica el Palacio de Gobierno, sino que se desperdigaron por todo el país para instalarse en las tiendas nada épicas del comercio informal (Toranzo, 1989; Sanjinés, 1992; García Linera, 2003). La izquierda se había quedado sin sujeto de la revolución y su narrativa victoriosa del ascenso del proletariado había terminado trunca e incumplida. La historia se encargaba de mostrarnos las ruinas del supuestamente invencible modelo teleológico marxista de la revolución occidental.

Los izquierdistas respondieron de diferentes maneras ante semejante derrota. Los más avezados se volvieron neoliberales a ultranza y ofrecieron sus servicios a los partidos de derecha ascendente, particularmente al MNR. Los menos avezados, y, para mal de males, todavía utópicos, se aferraron a un indigenismo de clase media, de ribetes izquierdizantes. Sea cual fuere el desdichado destino de esta izquierda ilustrada, lo concreto es que ella cedió el paso a un período de dominación de la derecha que podemos calificar de “dominación sin hegemonía” (Guha, 1997). Entre 1985 y 1997, se construyó el “estado neoliberal-patrimonial contemporáneo” (García Linera, 2002, 155) y se consolidó el bloque social compuesto por fracciones empresariales ligadas al mercado mundial, a inversionistas extranjeros y a organismos internacionales de regulación que dominaron, sin el consenso ni el apoyo popular, todo el campo de las políticas públicas.

En los últimos tiempos, este bloque de dominación –sin hegemonía y, por lo tanto, sin consenso– se fue resquebrajando de manera cada vez más acelerada debido a la reorganización del movimiento popular. Los levantamientos populares de abril y septiembre de 2000, de julio de 2001, febrero de 2002, febrero de 2003, y los más recientes, de septiembre y de octubre de 2003, así lo han demostrado. Hoy vivimos bajo el signo de la insurrección permanente de los diversos movimientos sociales que controlan políticamente importantes grupos urbano-rurales. Estos movimientos pretenden imponer políticas públicas que modifiquen la distribución de excedente social, dejando atrás a los partidos políticos, los que perdieron su capacidad mediadora y dejaron de ser los vehículos tradicionales de canalización de las demandas de la sociedad ante el Estado. Lo que pasa en Bolivia, como en otras partes de América Latina, es que la sociedad civil ha comenzado a crear otras formas de mediación política que operan bajo nuevas prácticas de deliberación. Los cabildos y las asambleas han puesto en jaque el juego político de las instituciones dominantes, acostumbradas a los pactos de gobernabilidad y a las discusiones parla-

mentarias. Los movimientos sociales, que no pueden compararse a los partidos políticos porque no tienen una articulación social en gran escala, gozan, sin embargo, de una pasmosa capacidad para crear redes sociales subalternas que luego se tornan en movilizaciones populares que controlan extensas zonas geográficas del Estado.

El sociólogo político boliviano René Zavaleta Mercado solía decir que las crisis son momentos privilegiados de conocimiento porque revelan, como el *Angelus Novus* de Benjamín, lo que no es visible ni inteligible en los momentos de dominación institucionalizada. En el caso que nos atañe, fueron las crisis generadas por los levantamientos populares arriba señalados las que revelaron la existencia de un subsuelo político alternativo, negado por el sistema institucional oficial, y que también pusieron de manifiesto la poca aceptación que hoy tienen los partidos políticos (Tapia, 2001).

Puesto que las crisis forman parte del proceso de constitución de la autonomía de los movimientos subalternos, podría decirse que las elecciones de junio de 2002, donde el MAS de Evo Morales y el MIP de Felipe Quispe lograron sendas victorias, fueron el momento estelar —dado el curso de los acontecimientos actuales, no será el único ni el último— de la acumulación histórico-política del movimiento indígena.

Ocurre que el subsuelo político al que nos referimos revela ahora, en las elecciones de 2002, su fuerza identitaria. Es la naturaleza quechua-aymara de los movimientos sociales que había quedado oculta, agazapada detrás del discurso de clase del sindicalismo minero. Ahora, libres de ropajes que encubran la identidad, los indios y los campesinos retoman un protagonismo político que acerca al presente la memoria de las rebeliones indígenas de los siglos XVIII y XIX. Así, conscientes de su historia, el MAS y el MIP le asestan un duro golpe al sistema político tradicional porque ponen en jaque la gobernabilidad institucional que la élites habían creado a duras penas durante las últimas dos décadas. En los hechos, no es una victoria numérica sino moral la que los partidos indios lograron en las últimas elecciones. Es la derrota mestizo-criolla a manos de indios y cholos que ingresan en el escenario político sin tener que pedir permiso ni a los intelectuales de izquierda, ni a los políticos que los representan. En otras palabras, e independientemente de que los movimientos indios retengan sus características actuales, no hay posibilidad alguna de que, en el futuro, la izquierda pueda dejar de tener en cuenta a los indios como sujetos autónomos y como actores sociales por derecho propio. En tal sentido, los indios y los cholos ingresan a la disputa política para quedarse. A continuación, veamos cómo ganaron en los últimos años este su derecho histórico.

2. La resistencia de los cocaleros

Al responder a las expectativas políticas y sociales de la población trabajadora de los valles del Chapare de Cochabamba, el MAS de Evo Morales es la

agrupación política de un sector social específico: los mineros relocalizados en esta zona de cultivo de la hoja de coca. En efecto, desalojados de las minas estatales que fueron privatizadas, entre 1985 y 1988, por el estado neoliberal, miles de trabajadores mineros migraron a los valles tropicales del Chapare para poder sobrevivir. De la siembra de tubérculos, plátanos y cítricos, estos relocalizados pasaron al cultivo de la hoja de coca. Este cultivo constituye, desde hace siglos, un mercado para consumidores urbanos y rurales, tanto en Bolivia, como en Perú y Argentina.

El cultivo de la coca tuvo un incremento en los años 80 porque los mineros relocalizados encontraron en la coca un cultivo rentable, capaz de darles una nueva posibilidad. Hay que también tener en cuenta que en la década de los 80 la hoja de coca era un cultivo en expansión. La así llamada producción “excedentaria” de la coca pasó a ser materia prima para la elaboración de pasta base de cocaína. La coca contaba con un mercado asegurado y en expansión. Esta producción excedentaria ha sido motivo de persecución permanente por la policía y el ejército bolivianos, en el marco de la “guerra contra las drogas” montada por el gobierno de EEUU. El MAS proviene de las luchas de resistencia contra la erradicación de los cultivos de coca.

Tres son las razones que Gutiérrez y García Linera (2002, 18-20) dan para explicar el éxito de este movimiento de mineros transformados en campesinos cultivadores de coca: en primer lugar, la extrema necesidad de los migrantes a las zonas de cultivo. El MAS es un movimiento político que se formó por la extrema necesidad de sus militantes. Ellos supieron desde el principio que sólo contaban con su cohesión interna para enfrentar los planes gubernamentales que pretendían sustituir los cultivos de coca por cítricos o plátanos sin rentabilidad alguna.

En segundo lugar, fue decisiva la calidad de “colonizadores” que tiene un gran porcentaje de la población del Chapare. Son hombres y mujeres que, despedidos de las minas y migrantes en su propio país, han construido prácticamente todo lo que hay de “desarrollado” en la región. Así, los sindicatos agrarios que dieron origen al movimiento cumplieron tanto funciones de organización como de ejercicio del poder local. Ampliando prácticas sindicales, el MAS tuvo una capacidad de gestión colectiva que pudo, como veremos a continuación, adaptarse a la Ley de Participación Popular. Sin embargo, y en la práctica real, los nuevos dirigentes, que ya no conforman la consabida “clientela” de los partidos tradicionales, acataron disciplinadamente las órdenes que provenían de sus bases y permanecieron ligados a ellas, a la tradición de las asambleas mineras, oponiéndose tenazmente a la separación entre la estructura política y el movimiento social.

En tercer lugar, está la presencia de Evo Morales, ligado estrechamente a toda la movilización popular, tanto cocalera como regional. Aymara migrado al Chapare, Evo Morales abandonó una región árida de altura, para ubicarse en

el trópico de Cochabamba, atraído por las mayores posibilidades laborales y comerciales que ofrece esta región, y debido al otro fenómeno globalizador que es el mercado de la coca.

El MAS se diferencia de los movimientos revolucionarios de otros países, como Sendero Luminoso y los otros movimientos guerrilleros de América Latina, por no tener un claro vínculo financiero con el narcotráfico, ni tampoco una clara predisposición a la lucha armada. En tal sentido, el MAS es un movimiento social de masas, tentado de pasar a la lucha armada porque no le han faltado amenazas y provocaciones del ejército y de la embajada norteamericana.

De manera por cierto astuta, el MAS fue uno de los primeros movimientos en acoplarse al nuevo escenario creado por la Ley de Participación Popular (Albó, 2002, 77). En efecto, los cocaleros decidieron participar por sí mismos en las primeras elecciones municipales en las que debía aplicarse la mencionada ley de remunicipalización territorial. Con esta finalidad, crearon el partido Asamblea Soberana del Pueblo, en 1996. No reconocidos por la Corte Nacional Electoral, los cocaleros se presentaron bajo el nombre de otro partido y lograron obtener la primera mayoría en el área rural del departamento de Cochabamba, además del control de importantes alcaldías rurales. Quedaba claro que un movimiento opositor del esquema neoliberal podía controlar los municipios, la expresión local del Estado, por la vía democrática.

El movimiento de Evo Morales fue creciendo poco a poco, logrando victorias en las elecciones nacionales de 1997, momento en el que Evo Morales alcanzó el escaño de diputado nacional. Desde entonces, a Evo no le han faltado problemas externos e internos en la conducción del movimiento. En lo interno, su liderazgo fue cuestionado seriamente por el quechua cochabambino Alejo Véliz. La lucha entre ambos provocó la escisión del movimiento, primero dentro de la Federación de Campesinos de Cochabamba, y, después, dentro de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la organización máxima del sindicalismo campesino. Estas maniobras fueron orquestadas por los partidos tradicionales que siempre vieron en el movimiento de Evo el peligro latente de que los cocaleros llegasen a controlar otras organizaciones importantes fuera de las áreas productoras de coca.

En lo externo, el ascenso al poder del general Hugo Bánzer, en 1977, constituyó otro golpe duro para el MAS. Bánzer hizo de la extirpación de la hoja de coca la causa de su mandato presidencial. Estaba seguro de que por esa vía conseguiría el apoyo del gobierno de EEUU, y que limpiaría su nombre de viejos estigmas que lo vinculaban con el narcotráfico. La meta de “coca cero” pesaría fuertemente sobre los actos del MAS durante el gobierno de Bánzer, quien murió antes de terminar su mandato.

En suma, el MAS logró organizar un movimiento contestatario que reúne en torno de Evo Morales a importantes dirigentes mineros y a un creciente sector

de clase media que incluye a intelectuales que no quisieron acomodarse a las políticas neoliberales de las décadas pasadas. Objeto de las críticas más fuertes del gobierno norteamericano –últimamente el gobierno mexicano también le negó ingreso a México, impidiéndole participar en la reunión de Cancún– Morales ha sabido explotar las críticas y las amenazas para aparecer como abanderado de la causa nacional en contra del imperio, que hace vanos esfuerzos por acallarlo.

El movimiento cocalero también creó nuevas formas de resistencia popular. El movimiento ha realizado un sinnúmero de marchas y bloqueos de caminos, en coordinación o no con otros actores sociales, y ha sufrido cerca de un centenar de bajas debidas sobre todo a las acciones represivas de las fuerzas del orden. A fin de evitar la represión, las marchas han recorrido senderos de montañas difíciles de detectar hasta llegar por varias vías a la sede de gobierno.

Pero esta modificación drástica de la relación de fuerzas sociales que vive hoy Bolivia no se limita al movimiento organizado por Evo Morales. A partir de 2000, dos otros grandes movimientos sociales surgieron en Bolivia: por una parte, un combativo movimiento regional de defensa del agua de Cochabamba y, por otra parte, una poderosa insurgencia aymara en el Altiplano, que ha puesto en serios aprietos al gobierno central. Veámoslos con algún detenimiento.

3. Otros movimientos sociales

Al enfatizar en la “cultura de vida”, la Coordinadora del Agua y de la Vida fue uno de los más importantes y exitosos movimientos sociales de los últimos años. Como en el caso del MAS, la Coordinadora, una asociación todavía más flexible de gremios campesinos, de asociaciones comunales de riego, de desocupados, de jóvenes y de ciudadanos en general, mostró, entre enero y abril de 2000, la articulación de fuerzas urbano-rurales de Cochabamba que, en esta ocasión, se oponían a la intención gubernamental de privatizar en manos de consorcios transnacionales los sistemas de riego campesinos que, desde hace siglos, son administrados por las propias comunidades.

Uno de los logros más claros de este movimiento de la Coordinadora fue hacer visible por primera vez los límites de las reformas neoliberales iniciadas en 1986. En las duras jornadas de enero de 2000, el país vio la nueva cualidad organizativa de este tipo de movimientos: movilizaciones laxas, territorializadas, que giran alrededor de demandas básicas, como agua, tierras, servicios, y que muestran el estado de disponibilidad objetiva de la población para luchar en defensa de sus propios intereses, sin depender de las estructuras institucionales, ni de la mediación de los partidos políticos.

En los últimos años, los movimientos sociales, como este de la Coordinadora, no sólo generaron un polo de atracción articulado en torno a una demanda específica; también crearon, a partir de la acumulación de varias demandas

concretas, un programa de reformas económico-políticas lo suficientemente denso como para paralizar el Estado, producir “ruido” en su discurso político, y desplazar, como bien señala García Linera (2002, 21), la legitimidad discursiva de la modernidad globalizada, incluyendo la privatización, la democracia pactada y la gobernabilidad. Todo esto significó que, con el actuar de los movimientos sociales, el perspectivismo homogenizador del Estado –incluida su visión identitaria del mestizaje– quedase descentrado y profundamente cuestionado. Volveremos a este tema cuando toquemos más tarde el movimiento indígena de Felipe Quispe. Dicho de otro modo: los nuevos movimientos sociales multiplicaron los centros de irradiación discursiva y abrieron la posibilidad de concebir la democracia de una nueva manera. Pues de lo que se trató fue de generar un proceso de reforma de la política que viniese de la propia sociedad civil. De hecho, este proceso tuvo un sentido democratizante muy diferente porque alteró el monopolio de la política otorgado al sistema de partidos.

Al iniciar este apartado sobre la Coordinadora del Agua, dijimos que ella promovió en la sociedad civil una “cultura de vida”. Conviene ahora explicar un poco más este asunto. La Coordinadora supo ligar la lucha por el consumo de un bien natural con la búsqueda de una nueva praxis política en el seno de la sociedad civil (Tapia, 2002, 54). Lo interesante e importante es que el movimiento generado por la Coordinadora pretendió no sólo la reivindicación de un bien natural, sino también la reforma de la sociedad. En efecto, la Coordinadora fue capaz de insuflar vida a una sociedad civil que sufría la desarticulación y el pasmo que le produjeron las reformas neoliberales. En otras palabras, la Coordinadora proporcionó un nuevo modelo de articulación organizativa y de acción a aquellos sectores subalternos que se vieron afectados por las reformas económicas que condujeron a los despidos laborales. En este sentido, la Coordinadora fue incluso un referente para el actuar de jóvenes de la calle, de lustrabotas, de estudiantes y de amas de casa.

Dos son las características de los movimientos sociales que giran en torno de la satisfacción de demandas básicas, como el agua, la tierra y los servicios. En primer lugar, crean espacios de deliberación paralelos a los de los partidos políticos. Se trata de espacios cambiantes, discontinuos, polimorfos (Tapia, 2002, 62) que se modifican de acuerdo con la naturaleza de los conflictos y de las luchas sociales. Como afirma Tapia, estos espacios son “campos de fuerza” movibles; no son “lugares estables” de la política institucional. En tal sentido, los “campos de fuerza” son zonas de tránsito donde los grupos sociales prefieren “hacer preguntas” antes que “dar respuestas” a los graves conflictos socio-económicos que pesan sobre nuestras sociedades. Por ello, los movimientos sociales permiten que los problemas y las frustraciones de la sociedad civil “fluyan”, pero se alejan, la mayoría de las veces peligrosamente, de las “formas” establecidas por la organización social.

En segundo lugar, los movimientos sociales muestran con cruel objetividad que el centro de la política ha dejado de estar en los lugares institucionaliza-

dos de la representación –el Congreso, por ejemplo, se ha vuelto un auténtico “cetro de paja”–, de la mediación de los partidos, y de la administración del Estado. Hoy en día, Bolivia vive el momento de una extrema fluidez social porque los movimientos sociales luchan tenazmente contra las estructuras globales impuestas durante diecisiete años de políticas neoliberales. Los acontecimientos más recientes, particularmente la declaración de guerra civil que el movimiento indígena acaba de hacer en el altiplano aymara, son indicación clara de que el Estado no ha podido asimilar los remezones producidos por la sociedad civil; que las fuerzas sociales se siguen desplazando por caminos no agotados. Estos caminos se entrecruzan con las demandas del movimiento aymara, cuya presencia en el escenario político y social boliviano no puede quedar inadvertida. Ocupémonos de él, tanto por su significado social, como por la ruptura epistemológica que el actual pensamiento indio introduce en el conocimiento de la nación boliviana.

El segundo gran movimiento social que surgió en 2000 fue el de las comunidades indígenas de la altiplanicie aymara, organizadas en torno de la Csutcb. Bajo el liderazgo de Felipe Quispe, “el Mallku”, este movimiento se dio a conocer por tres grandes bloqueos de carreteras y por el cerco de la ciudad de La Paz durante 2000, 2001 y 2002. Debemos enfatizar en que los acontecimientos cobraron fuerza gracias a la labor política desplegada en importantes comunidades indígenas, como la de Achacachi, por Felipe Quispe. En efecto, el Mallku es una ficha importante en la guerra civil que las comunidades del altiplano norte y de los valles de Sorata declararon recientemente al Estado, en rechazo de la venta del gas a EEUU y a México por puertos chilenos.

Lo importante de estos movimientos indígenas es que las comunidades han comenzado a propagar un discurso de igualdad entre indígenas y criollo-mestizos, de autogobierno y de nuevas políticas de administración indígena del Estado, de acuerdo con los usos y las costumbres locales. Uno de los discursos más eficientes e impactantes es el de “las dos Bolivias”, con el cual Felipe Quispe ha producido un duro remezón en la conciencia ciudadana, la cual es fundamentalmente racista y colonialista hasta el día de hoy. En efecto, el movimiento de Felipe Quispe ha removido los cimientos republicanos de un Estado que sólo se acordó de los indios en momentos de pugna electoral, y que los excluyó de la vida ciudadana aún después de la revolución nacional de 1952. Es claro que en ciento setenta y ocho años de vida independiente, el Estado boliviano se olvidó de incorporar las culturas, las lenguas y las prácticas indígenas, en el ámbito de la esfera pública ciudadana; en realidad, jamás pensó que algún día los indígenas se convertirían en actores políticos capaces de definir la estabilidad de los gobiernos criollo-mestizos. En tal sentido, el eslogan de “las dos Bolivia” bloquea hoy en día el “sí, se puede” de la Bolivia modernizada que plantea el MNR de Sánchez de Lozada. Lo interesante es que detrás de “las dos Bolivia” de Felipe Quispe –una es la Bolivia criolla; la otra es la Bolivia de los indios y de sus comunidades– corre una corriente alterna que socava los fundamentos de la nacionalidad boliviana. Ampliemos entonces la

discusión del movimiento indígena al vuelco epistemológico que propugna Felipe Quispe, para quien la nación mestizo-criolla debe ser puesta de cabeza.

Al venir de un pasado violento que incluye la fundación de los “ayllus rojos” y la creación del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) al final de la década de los 80, la ideología extremista del movimiento indígena justificó la promoción de un “Estado de trabajadores y la unión socialista de las naciones oprimidas”. Con la mezcla del extremismo indígena y de la doctrina marxista de la lucha de clases, el indianismo radical de Felipe Quispe apela hoy a aymaras, a quechuas y a otras naciones indígenas, para la creación de una nueva madre patria, la “Unión de las Naciones Socialistas del Qullasuyu”, bajo la égida del colectivismo y del comunitarismo.

Felipe Quispe, quien radicaliza el indigenismo, subvierte el *statu quo* y rearticula el movimiento indígena con una posición ambigua muy astuta, que se ubica tanto “dentro” del sistema político –Felipe Quispe es diputado nacional y jefe de un partido político– como “fuera” de él, promoviendo movimientos populares que tienden a desarticular el sistema institucional. Este posicionamiento le permite al indianismo radical superar la mera formalidad multicultural e incidir, positivamente o negativamente, dependiendo de quién es el que juzga, en la práctica política cotidiana.

Me permito presentar a continuación un aspecto interesante del discurso de Felipe Quispe que está relacionado con su mirada de “las dos Bolivias”: su afirmación de que hay que “indianizar al q’ara”, y poner de cabeza la construcción criollo-mestiza de la nación. Al afirmar que debemos indianizar a los criollo-mestizos, a los “q’aras”, a fin de corregir las injusticias cometidas en contra de las nacionalidades indígenas, Quispe pone de cabeza la construcción simbólica de lo nacional. En efecto, lee negativamente la construcción del mestizaje, una de las narrativas dominantes de la historia boliviana. Así, el Mallku ubica estratégicamente la construcción visual de la Bolivia moderna bajo la idealización mestizo-criolla del indio, y, luego procede con la reubicación de la metáfora corporal (ahora cabeza abajo) a fin de dar la percepción subalterna de la sociedad. En efecto, preguntando sobre si la indianización de los “q’aras” implica repensar el Estado-nación y los logros de la Revolución nacional de 1952, Quispe da una nueva interpretación del problema cuando señala que la reificación cultural de las identidades indígenas no pertenece ni a la revolución del 52, ni a la construcción del “nacionalismo revolucionario”. Para el líder indígena, el mestizaje como discurso constructor de la nación se retrotrae a los intentos pedagógicos propuestos por las elites criollo-mestizas durante las primeras décadas del siglo XX.

Si estas elites identificaron la esencia de la nación en la energía corporal del indio, dominada y guiada por la inteligencia mestiza, la que ejercita su función pedagógica sobre el cuerpo indígena (Tamayo, [1910] 1975). Felipe Quispe, quien parece conocer el argumento –Quispe termina la carrera de his-

toria en la Universidad Mayor de San Andrés—, ubica a principios del siglo XX la metáfora corporal con la cual los sectores dominantes ejercieron un protectorado pedagógico sobre los dominados, confiriéndoles una identidad fraguada. Para Quispe, el indio ha estado viviendo “con ropa prestada” desde entonces, y, aunque “use corbata y traje occidental”, sigue siendo “indio por debajo”. Estas afirmaciones no pueden ser más visuales, y entrañan una percepción conflictiva de la modernización, cuestionando abiertamente la construcción histórica del mestizaje.

Esto me lleva a afirmar que los movimientos indígenas más recientes no pueden ser enmarcados dentro de discursos políticos reconocibles. Ni socialistas, ni indigenistas, estos movimientos hablan desde afuera de la conciencia mestiza y de su tiempo histórico (Sanjinés, 2001). Pero estos movimientos —no olvidemos que el MIP de Felipe Quispe es un partido político— también ven la necesidad de combatir el sistema político desde adentro. De este modo, los movimientos indígenas se mueven estratégicamente en el campo de la radical no permanencia, recordándole constantemente a la gente que las ideas cambian dependiendo de quien sea el interlocutor del momento. Por ello, los movimientos son absolutamente claros en negarse a aceptar el yo centrado del mestizaje como forma perdurable. Así, la respuesta subalterna de “indianizar al q’ara” enfatiza en el hecho de que la sociedad dominante está llamada a reconocer que aymaras, quechuas y otras nacionalidades tienen también sus posiciones y sus modos de manifestar que sí son ciudadanos, y que lo son “ahora”, no mañana sino hoy día. Y los movimientos indígenas saben con su proverbial testarudez que las cosas existen bajo el modo constitutivo de la negatividad, por eso son “janiwa” (“no”, en aymara). Pero los sectores dominantes parecen no entender ni admitir que el mensaje subalterno tiene su posicionalidad y su lógica. Por eso, el diálogo de sordos lleva a constantes enfrentamientos que, lamentablemente, cobran cientos de víctimas.

4. Las limitaciones de los nuevos movimientos

Los tres movimientos que hemos estudiado revelan que una auténtica transformación social está produciéndose en Bolivia. Sin embargo, somos conscientes de que falta mucho camino por recorrer para que estos movimientos logren una transformación real y efectiva del aparato estatal. De igual modo, nos percatamos de la honda brecha que separa el campo de los procedimientos liberales y el de las costumbres comunitarias.

En lo inmediato, también existe el riesgo de que las instituciones oficiales, junto con sus mecanismos seductores, terminen por atemperar la fuerza de los movimientos, puesto que éstos muestran una serie de limitaciones. Revisémoslas a tiempo de concluir este trabajo.

Uno de los principales problemas de los movimientos sociales aquí descritos es que su fuerza regional, preponderantemente agraria y campesina, se

diluye en los espacios urbanos de las principales ciudades. Sin embargo, este factor parece haber sido superado por los levantamientos populares más recientes, particularmente por el del 12 de octubre de 2003, en la cruenta refriega que tuvo lugar en la ciudad del Alto, de aproximadamente medio millón de habitantes, dominada por migraciones campesinas y de mineros relocalizados. En los últimos acontecimientos, parece haber surgido un movimiento social de carácter nacional, conducido por la así llamada Coordinadora de la Defensa del Gas.

Álvaro García Linera afirma que, aunque el movimiento indígena tiene hoy la propuesta más seria de transformación del Estado colonial republicano, a través de la incorporación estatal de las prácticas organizativas comunales indígenas, esta propuesta sólo podrá avanzar si se la articula con las expectativas urbanas no indígenas. En este sentido, el MAS de Evo Morales, que tiene una amplia representación parlamentaria, lamentablemente falla por su pobre capacidad generadora de nuevas ideas que atraigan a la masa poblacional urbana (García Linera, 2003).

Por último, no podemos dejar de observar el hecho de que los liderazgos son fácilmente sobornables. En este sentido, los propios intelectuales indígenas saben que las posibilidades de que el sistema engulla a quienes quieren abolirlo, son siempre elevadas. Esteban Ticóna, uno de los intelectuales indígenas más conocidos en el ambiente académico, señala que la mayoría de los líderes nacionales indígenas y campesinos terminan, tarde o temprano, devorados por la política tradicional de la que forman parte desde el momento en que se alejan de sus comunidades de base (Ticóna, entrevista de Rafael Archondo, 2003).

Estas limitaciones, en particular la pobre capacidad de articular la diversidad social y el localismo temático de los movimientos indígenas, se conectan con la incomunicación ancestral que define las dos Bolivias mencionadas por Felipe Quispe; estas limitaciones responden, además, al peso de la situación colonial que se vio tan claramente en la sesión de Congreso de 6 de agosto de 2002. Un año después, seguimos acumulando enfrentamientos que indican que Bolivia no logra superar la “cultura de muerte”, del “cerco y acecho”.

Bibliografía

- Albó, Xavier (1972): “Dinámica de la estructura intercomunitaria de Jesús de Machaca”, *América Indígena*, n° 32, México, pp. 773-816.
- _____ (2002): *Pueblos indios en la política*, La Paz, Plural editores.
- Calderón, Fernando y Roberto Laserna (1994): *Paradojas de la modernidad. Sociedad y cambios en Bolivia*, La Paz, Fundación Milenio.
- García Linera, Álvaro (2002): “El ocaso de un ciclo estatal”, *Democratizaciones plebeyas*, La Paz, Muela del Diablo, pp. 149-176.

- _____ (2003): "Las nuevas izquierdas bolivianas", *Le Monde Diplomatique*, año 1, n° 10, La Paz, julio, pp. 1-4.
- García Linera, Álvaro y Raquel Gutiérrez (2002): "El ciclo estatal neoliberal y sus crisis", *Democratizaciones plebeyas*, La Paz, Muela del Diablo, pp.11-24.
- Guha, Ranajit (1997): *Dominance Without Hegemony. History and Power in Colonial India*, Cambridge, Mass, Harvard University Press.
- Lazarte, Jorge (2000): *Entre dos mundos: la cultura política en Bolivia*, La Paz, Plural editores.
- Mayorga, Fernando (2002): "Los desafíos de la nación boliviana: Estado pluri-nacional y nación multicultural", *Bolivia: visiones de futuro*, La Paz, FES-Ildis, pp. 35-67.
- Rojas, Gonzalo (1994): *Democracia en Bolivia hoy y mañana. Enraizando la democracia con la experiencia de los pueblos indígenas*, La Paz, Cipca.
- _____ (1999): *De ángeles, demonios y política. Ensayos sobre cultura y ciudadanía*, La Paz, Muela del Diablo.
- Sanjinés, Javier (1992): "Entre la cruz y la tribuna del pueblo: relocalización y movimientos populares en Bolivia", *Hermenéuticas de lo popular*, Minneapolis, Mn, Ideologies and Literatures, pp. 341-377.
- _____ (2001): "Mestizaje Upside Down: Subaltern Knowledge and the Known", *Nepantla: Views From South*, vol. 3, n° 1, Durham, NC, pp. 39-60.
- Tapia, Luis (2001): "Subsuelo político", *Pluriverso. Teoría política boliviana*, La Paz, Muela del Diablo.
- _____ (2002): "Movimientos sociales, movimiento societal y los no lugares de la política", *Democratizaciones plebeyas*, La Paz, Muela del Diablo, pp. 29-72.
- Tamayo, Franz ([1910] 1975): *La creación de la pedagogía nacional*, La Paz, Biblioteca del Sesquicentenario de la República.
- Ticona, Esteban (2003): "Estamos jugando en cancha ajena", *Pulso*, La Paz, 15 de agosto, pp. 18-19.
- Toranzo, Carlos y Mario Arrieta (1989): *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia*, La Paz, Unitas-Ildis.